

EL ARCO IRIS A CUADROS

Si América Latina ha sido el lugar de la oposición más radical a la reestructuración neoliberal durante los últimos cinco años, Bolivia ha sido su primera línea insurreccional. Movilizaciones populares de una amplia escala geográfica, que unían a un gran abanico de fuerzas de clase y etnia, han derrocado ya dos presidentes –Sánchez de Lozada en octubre de 2003; Mesa en julio de 2005– y vetado la toma de posesión, prescrita constitucionalmente, de un tercero, el presidente del Senado Vaca Díez, en julio de 2005. Con las elecciones de diciembre de 2005 acercándose, estas fuerzas continúan preparadas para ejercer una influencia sostenida en el desarrollo económico y político futuro del país.

Pero, aunque es posible ver las protestas tumultuosas de Bolivia dentro del contexto de una serie de desafíos regionales al consenso de Washington en América del Sur, donde los movimientos de masas han sacudido o desplazado a las elites gobernantes tradicionales en Argentina, Ecuador, Venezuela y Perú, deberíamos evitar tratar la crisis simplemente como un efecto local de un fenómeno transnacional predecible. No deberíamos considerar ni el «neoliberalismo» ni la «globalización» como un agente autónomo que genera inevitablemente sus propios sepultureros; tampoco se debería dar por sentado que los levantamientos de masas constituyen una única ola, que se extiende inexorablemente de un país a otro. Las protestas en Bolivia entre 2000 y 2005 han seguido su propio ciclo, que detallaremos a continuación. Pero sólo es posible comprender las dinámicas que subyacen dentro del contexto de las tradiciones insurreccionales específicas de los últimos doscientos años; la memoria y el olvido de momentos revolucionarios anteriores; y las conexiones llenas de tensiones entre expresiones políticas indígenas y populares-nacionales que éstos han supuesto.

Sostendremos que el ciclo actual constituye el tercer momento revolucionario más importante de la historia boliviana. El primero fue indígena. En agosto de 1780, una insurrección regional en Potosí, bajo el liderazgo de un comunero indio llamado Tomás Katari, desató una cadena de movimientos locales que acabarían conociéndose por el descendiente de la realeza inca, José Gabriel Túpak Amaru, que encabezó simbólicamente la



insurrección en Cuzco. La revuelta prendió en el altiplano meridional de Oruro y La Paz a principios de 1781, y tropas aimaras y quechuas dejaron el campo libre de control colonial español. El comandante campesino aimara en La Paz, Túpak Katari, asfixió a las fuerzas españolas que resistían en la ciudad en el transcurso de un asedio que duró cinco meses. Sin embargo, al carecer de aliados urbanos, las tropas indias nunca consiguieron tomar la ciudad. A finales de 1781, Katari fue destripado y descuartizado y las autoridades españolas mantuvieron el dominio colonial hasta que fueron derrocadas definitivamente en 1825. Para las elites criollas, así como para los aimaras rebeldes, los asedios a La Paz de los últimos cinco años han traído a la memoria la gran insurrección anticolonial de hace dos siglos.

La segunda gran revolución en Bolivia, la de 1952, fue también la primera revolución popular-nacional de la América Latina de posguerra. Una insurrección urbana de tres días, dirigida por el Movimiento Revolucionario Nacional (MNR), de clase media, y respaldada por la fuerza armada de las milicias trotskistas de los mineros del estaño (POR) de los departamentos de Oruro y Potosí, así como por los estudiantes y por los obreros armados de La Paz, provocó la ruina temporal de la clase propietaria, la nacionalización de las minas, la extensión universal del sufragio y el fin del dominio oligárquico. Empresas de propiedad estatal pasaron a gestionar la extracción y exportación de los recursos naturales, en especial minerales y petróleo, e inauguraron un modelo que duró, con la alternancia entre el dominio de la esfera política por parte del MNR y regímenes militares autoritarios *de facto*, hasta el hundimiento del mercado del estaño y la reestructuración neoliberal de 1985.

A pesar de que la memoria de 1952-1953 parecía obsoleta tras las frustraciones propias de la revolución y de la imposición del neoliberalismo, un nuevo horizonte revolucionario nacional –el tercer momento insurreccional de Bolivia– ha visto la luz a principios del siglo XXI a través de la iniciativa insurgente aimara. Este proceso recuerda las lecciones de las luchas recientes, la memoria vívida de aquellas más alejadas (1781) y las reivindicaciones populares-nacionales –en especial, con respecto a la soberanía sobre los recursos naturales– asociadas a 1952¹.

Por regla general, las luchas indias y popular-nacionales de Bolivia han seguido cursos históricos separados, y la incompreensión, la sospecha y la manipulación han infestado las relaciones entre los intelectuales y dirigentes políticos de origen indio y los mestizos o criollos progresistas. Sin embargo, los raros momentos de confluencia entre estas luchas han creado movimientos radicales poderosos y han dejado efectos duraderos. En el ciclo actual, los Días de Octubre de 2003, escenario del derrocamiento de Sánchez de Lozada, y la insurrección de junio de 2005, que condujo a la caída de Mesa, destacan históricamente como coyunturas excepcionales de este tipo, que combinaron de manera novedosa elementos de las luchas indias y populares-nacionales anteriores. Trabajadores urbanos y campesinos rurales de distintos sectores formales e informales se movilizaron simultáneamente y acabaron recibiendo el apoyo de las clases medias progresistas². El objetivo común era poner fin a un régimen político represivo y poco representativo, imponer el control soberano sobre los recursos naturales y convocar una asamblea constituyente para reestructurar la vida política y económica. La cristalización de un nuevo bloque «popular-nacional» parecía de repente posible.

¹ Sinclair THOMSON, «Revolutionary Memory in Bolivia: Anticolonial and National Projects from 1781 to 1952», en Merilee Grindle y Pilar Domingo (eds.), *Proclaiming Revolution: Bolivia in Comparative Perspective*, Cambridge (MA), 2003, pp. 117-134.

² Pese a la impresionante historia del sindicalismo en el país, el término «clase obrera» debe utilizarse con cautela, dada la descomposición de las organizaciones obreras y la informal-

Dos banderas

Durante aquellos días de octubre, la *wiphala*, la bandera con un arco iris a cuadros de la autodeterminación indígena ondeaba junto a la bandera boliviana tricolor, en la plaza de San Francisco de La Paz, cuando los manifestantes aimaras rechazaban el gobierno neoliberal en nombre de la nación. La mezcla de estos símbolos refleja el grado de superposición que existe hoy en día entre las identidades india y boliviana y entre las luchas india y popular-nacional. Cabría esperar que los efectos del neoliberalismo –sobre todo, los flujos masivos de población del altiplano rural a las ciudades y las tierras bajas orientales– hubieran acabado con las antiguas solidaridades étnicas, así como con las tradiciones proletarias; en lugar de ello, estas solidaridades se han reconstituido en las barriadas en constante expansión de El Alto y Cochabamba y entre el creciente número de jornaleros de las regiones agrícolas de las tierras bajas. Muchos de los manifestantes que tomaron la capital boliviana en octubre de 2003 procedían de asociaciones barriales populares de El Alto, una ciudad en el borde superior de La Paz, con una población de 800.000 habitantes, mayor que la de la propia La Paz y dentro de la cual un 82 por 100 se atribuye una identidad indígena aimara. Otros eran miembros de asociaciones de los barrios de Munaypata, Villa Victoria y Villa Fátima, construidos en las laderas, en donde predominaba netamente la población aimara; vendedoras del mercado, que pertenecían a asociaciones gremiales urbanas; jóvenes estudiantes y desempleados; mineros de Huanuni, un enclave al sur de la ciudad de Oruro; cultivadores de coca y colonos campesinos de los valles subtropicales de los Yungas, al noreste de La Paz; y miembros de las comunidades campesinas aimara del altiplano, encabezados por el distrito insurgente de Achacachi.

A diferencia, sin embargo, de las protestas de las décadas de 1970 y 1980 –cuando los partidos de izquierdas y una Central Obrera Boliviana (COB) todavía vigorosa unieron a estudiantes e intelectuales, así como a campesinos y obreros de los centros urbanos y mineros–, en 2003 ni los partidos de la oposición ni los sindicatos proporcionaron un liderazgo comparable. La participación de estudiantes y profesionales de las clases medias criollas y mestizas fue menor, mientras que las columnas de peones y jornaleros de ascendencia aimara que abarrotaron las calles del centro de la ciudad crecían y crecían. La decisión de Sánchez de Lozada de responder a las protestas con tanques y fuego abierto provocó una insurrección mayor, en la que hasta los criollos de los barrios de clase media y media-alta de La Paz iniciaron huelgas de hambre y tomaron las calles y los medios de comunicación audiovisuales para exigir la dimisión del presidente.

zación vigente desde 1985. La «reproletarización» urbana en sectores como El Alto afecta a las actividades de servicios y de manufactura a pequeña escala.

Las características distintivas de las muchedumbres de octubre –su autoorganización y su perfil mayoritariamente indígena– reflejan la dinámica general del tercer momento revolucionario de Bolivia. De acuerdo con el censo del 2001, el 62 por 100 de la población se considera indígena, es el porcentaje *per capita* más alto de las Américas³. Las implicaciones nacionales subyacentes de la lucha india actual son el resultado, en primer lugar, de la incapacidad de la revolución de 1952 de resolver la contradicción central de la formación social republicana, esto es, la dominación cultural, política y económica de la mayoría indígena por parte de una elite criolla y *mestiza* minoritaria. De ahí la importancia de la exigencia de una asamblea constituyente, a través de la cual los indígenas rurales y urbanos esperan obtener formas de representación política democratizadas e igualitarias a escala regional y nacional y ampliar el ámbito de autonomía comunitaria y soberanía indígena. En segundo lugar, el papel de las elites criollas en la entrega del control de los recursos naturales –en particular, el agua y, desde 2003, el gas– a empresas extranjeras, que los destinan a los mercados exteriores, se ha percibido de manera generalizada como una abrogación de la soberanía nacional, de la que sólo tenían posibilidad de beneficiarse una pequeña elite fiel a los intereses extranjeros.

Este último ciclo de resistencia se ha arraigado en formas no liberales de organización colectiva –los *ayllus* indios y las comunidades campesinas, las asociaciones de barrio y de vendedores de mercado, las centrales sindicales regionales, el sindicato de mineros, las federaciones de cultivadores de coca– que son centrales para la vida cotidiana de la mayoría de los bolivianos. Estas formas de organización, bajo ataque constante y aparentemente exitoso desde que se iniciaron los ajustes estructurales neoliberales a mediados de la década de 1980, producen formas de lucha que proceden de una historia política subalterna cuyos legados están presentes todavía hoy. Una matriz de política comunitaria indígena, cristalizada por primera vez durante las luchas anticoloniales de finales del siglo XVIII,

³ En El Alto, el 74 por 100 se identificaba como aimara y el 6 por 100 como quechua, mientras que, en La Paz, las cifras eran de 50 y 10 por 100 respectivamente. A escala nacional, el 25 por 100 se identificaba como aimara, el 31 por 100 como quechua y el 6 por 100 como parte de alguno de los treinta y un grupos indígenas restantes (uru-chipaya, tupi-guaraní, etc.). La autoidentificación indígena no se corresponde necesariamente con el dominio de una lengua materna. Aunque un 25 por 100 de los bolivianos se identificaron como aimara en 2001, por ejemplo, sólo el 14 por 100 hablaba la lengua; las proporciones equivalentes en el caso quechua son de un tercio y un 21 por 100 respectivamente. Los términos «aimara» y «quechua» provienen de la antropología lingüística del siglo XX y no de una denominación histórica propia de los pueblos nativos; pero la autoidentificación positiva se ha extendido a gran velocidad desde la década de 1990. Nuestra terminología sigue los usos corrientes en el país. El término «mestizo» da a entender una mezcla de ascendencia o herencia india y europea, pero en el altiplano suele implicar una distinción frente a los «indios» o sectores populares de «ascendencia aimara» (conocidos también como «*cholos*»); en las regiones de los valles, la denominación de «mestizo» se aplica con mayor frecuencia al campesinado y a los sectores populares urbanos. «Criollo» alude a las personas de ascendencia predominantemente europea.

ha configurado modelos contemporáneos de insurgencia y de control de base sobre los representantes políticos. Incluso cuando la antes poderosa COB entró en declive, el «desplazamiento» de las vanguardias de mineros a El Alto, Cochabamba o el área agrícola oriental dio lugar a la transmisión de las tradiciones de la política sindical a nuevas organizaciones populares y a generaciones más jóvenes. Por lo tanto, cuando los bolivianos iniciaron el último ciclo de resistencia e insurgencia en el año 2000, estas tradiciones radicales proporcionaron reservas inesperadas de fortaleza. Las fuerzas y las aspiraciones revolucionarias, que sólo desde fecha reciente se creían enterradas, han vuelto a la superficie con una energía y una creatividad sorprendentes, aunque dotadas de nuevas formas y operando en nuevas circunstancias.

Corrientes indígenas

Si el intenso flujo social del periodo neoliberal ha precipitado la formulación de una nueva política indígena, sus orígenes en el medio plazo se remontan a la década de 1970. Después de 1952, las reformas agrarias llevadas a cabo a través de la toma de tierras, junto con la creación de sindicatos campesinos y escuelas rurales *emeneristas*, habían asegurado en gran medida la lealtad política del campesinado indígena y pequeño propietario para con el MNR. Durante la década de 1960, se consolidó un pacto entre militares y campesinos contra los combativos mineros del estaño y la izquierda insurreccional. Hubo pocos delegados campesinos para la Asamblea Popular radical de junio de 1971, donde se sostuvo que los sectores aimara y quechua habrían intercedido en favor de los intereses militares conservadores.

La alianza entre militares y campesinos empezó a deshacerse bajo el impacto de la represión de Banzer durante la década de 1970, cuando los sindicalistas aimara de La Paz, Oruro y Potosí empezaron a renovar las tradiciones campesinas indias de lucha. Dos corrientes políticas críticas –*katarismo* e *indianismo*– se desarrollaron rápidamente a principios de la década de 1970. Ambas bebían de la misma fuente discursiva, Fausto Reinaga, que criticaba el uso del «mestizaje» como una ideología revolucionaria nacional y que colocaba el colonialismo y «la cuestión india» en el centro de su análisis⁴. En 1973, un grupo de *kataristas* –que reivindicaba el legado de Túpaj Katari, de su mujer, Bartolina Sisa, y del líder aimara de finales del siglo XIX, Pablo Zárate Villca– hicieron público el «Manifiesto de Tiwanaku», en el que se afirmaba que la conciencia de clase campesina y la conciencia étnica aimara se complementaban entre sí en lugar de entrar en contradicción, al tiempo que se reconocían los beneficios de la revolución nacional, así como los límites de esos beneficios. Los *kataristas* afirmaban que no sólo el colonialismo estaba en la raíz de la explo-

⁴ Fausto REINAGA, *La revolución india*, La Paz, 1969.

tación contemporánea, sino que también el capitalismo contribuía a ella y, que por lo tanto, estaban dispuestos a buscar aliados potenciales en la clase obrera, en el campesinado no aimara y en los pequeños comerciantes. Los *indianistas*, por su parte, tenían menor arraigo en el movimiento sindical campesino y ponían mayor énfasis en la dominación racial que en la de clase. Por lo tanto, desdeñaban las alianzas con lo que calificaban de izquierda «*mestizo-criolla*» y sostenían que repetía el paternalismo de los gobiernos del MNR y de las dictaduras militares.

Entre 1977 y 1984, los *kataristas* contribuyeron a derrocar tres dictaduras militares, fundaron la CSUTCB⁵, una federación sindical campesina indígena autónoma, y, en alianza con los sindicatos urbanos y los partidos de izquierdas, ayudaron a instaurar una democracia representativa. Tras las movilizaciones de masas de octubre de 1982, Hernán Siles Zuazo fue elegido presidente y Jaime Paz Zamora, vicepresidente, ambos candidatos de la Unidad Democrática Popular (UDP). Sin embargo, las esperanzas iniciales de una transición de la «dictadura» a una «democracia» y, a continuación, al «socialismo» se estrellaron contra los escollos de la mala administración y la crisis. Carente de un proyecto coherente de gobierno, la coalición de la UDP pronto se rompió y sufrió la presión de sucesivas oleadas de huelgas convocadas tanto desde la izquierda como desde la derecha. La inflación se disparó y la crisis económica y política abrió camino a una solución neoliberal, aplicada por el gobierno de Paz Estenssoro. El impulso político acumulado a lo largo de las movilizaciones de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 quedó desperdiciado y el horizonte revolucionario se marchitó.

Las guerras del agua

La reestructuración de la década de 1980 detuvo la hiperinflación, al tiempo que hundía al país en la recesión. Las minas de estaño se privatizaron. Miles de mineros fueron despedidos y, posteriormente, expulsados de sus hogares, lo cual conllevó la dispersión del que cabe sostener que era el proletariado más combativo de América Latina. Estos antiguos mineros se trasladaron a las ciudades de El Alto y Cochabamba, se sumaron a un flujo de migrantes campesinos que huían del progresivo deterioro de las condiciones en el campo, o bien se establecieron en el valle agrícola y las regiones de las tierras bajas de La Paz, Chapare y Santa Cruz, trayendo consigo las tradiciones de sindicalismo radical forjadas durante el medio siglo anterior. Muchos de los que migraron a las tierras bajas orientales empezaron a cultivar coca, satisfaciendo la demanda indígena interna de hoja de coca, así como abastecieron a un mercado internacional en aumento: durante la década de 1980, la pasta de coca y la cocaína se convirtieron en los productos de exportación más lucrativos de Bolivia. La resistencia más viva al ataque neoliberal provino del movimiento de cul-

⁵ Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia [N. de la T.]

tivadores de coca encabezado por Evo Morales⁶. Organizado inicialmente a través de federaciones sindicales locales y regionales, así como de milicias de autodefensa rudimentarias, el movimiento respondió a la «guerra contra las drogas» iniciada por Estados Unidos, haciendo hincapié en el lugar que la coca ocupaba en las tradiciones culturales andinas y negando su responsabilidad en el tráfico de drogas. A principios de la década de 1990 tenía 200.000 miembros y se había convertido en una fuerza con la que había que contar, ya que había llegado a impedir que los gobiernos de Jaime Paz Zamora (1989-1993) y, luego, de Gonzalo Sánchez de Lozada (en su primera legislatura, 1993-1997) aplicaran en su totalidad el plan de erradicación de la coca trazado en Washington.

A finales de la década de 1990, el panorama económico se había ensombrecido, no sólo para los cultivadores de coca, sino para el conjunto de la población. Se calcula que la erradicación de la coca costó al país, entre 1997 y 2002 –con Banzer de nuevo en el gobierno como «demócrata»–, entre 600 y 900 millones de dólares de los ingresos y más de 50.000 trabajos al año. El sector de los hidrocarburos fue el que mayores pérdidas sufrió. Como consecuencia de la aplicación de la legislación aprobada en 1996 por Sánchez Lozada, la empresa petrolífera estatal YPFB se dividió y se vendió al mejor postor, y las *royalties* que las empresas multinacionales debían pagar bajo los nuevos contratos se rebajaron del 50 al 18 por 100; a resultas de ello, los ingresos del gobierno cayeron en picado, y el déficit llegó a alcanzar los 430 millones de dólares en 1997. A raíz de la crisis financiera asiática, los flujos financieros internacionales se evaporaron en toda la región y las remesas en efectivo de los trabajadores migrantes bolivianos en Argentina se redujeron a un mero hilillo. En este contexto, en septiembre de 1999, el gobierno de Banzer, respondiendo a las severas críticas del Banco Mundial, impuso la privatización del suministro de agua del departamento de Cochabamba. Se cedería su explotación durante cuarenta años al único postor, un consorcio transnacional llamado Aguas del Tunari, respaldado por Bechtel y Edison (Italia). En enero de 2000, se anunciaron enormes aumentos de las tarifas, que duplicaron en muchos casos el coste del agua, que ahora suponía la cuarta parte del presupuesto familiar de las personas que ganaban el salario mínimo de 60 dólares.

Las movilizaciones populares que siguieron y culminaron en la «guerra del agua» de abril de 2000, estuvieron encabezadas por la Coalición para la Defensa del Agua y la Vida, conocida como la Coordinadora. Aunó a obreros de fábrica, granjeros, cultivadores de coca y activistas ecologistas que

⁶ Morales nació en Oruro en 1959. De niño, migró a Chapare con su familia y estuvo implicado en los esfuerzos organizativos cocaleros desde su primera adolescencia. En 1998, seis federaciones de cultivadores de coca del Chapare rural fundaron el *Movimiento al Socialismo* para luchar por una representación electoral. Morales fue elegido senador del MAS por el departamento de Cochabamba y el MAS consiguió varias alcaldías en la región. Hasta las elecciones generales de 2002, el MAS no excedería su base regional y sectorial.

se oponían a la privatización. Dirigida por el obrero fabril Óscar Olivera, la Coordinadora respondió a los aumentos de tarifas de enero de 2000 convocando una huelga general, que paralizó la ciudad de Cochabamba y la aisló del resto del país. Ante la protesta de masas, el gobierno de Banzer accedió a revisar las tarifas; como no presentó nuevas propuestas, la Coordinadora convocó otra huelga para febrero. En esta ocasión, el gobierno envió a 1.200 tropas y a la policía para hacerse con el control de la ciudad. Más de 175 personas resultaron heridas, pero la huelga continuó y el gobierno anunció una reducción temporal de las tarifas. Como sucedería en octubre de 2003, las reivindicaciones populares se radicalizaron rápidamente, y, como reacción a la represión estatal, se pasó de llamamientos por una reducción de las tarifas al rechazo directo del control multinacional sobre el agua y los recursos naturales.

La Coordinadora hizo un llamamiento a una «batalla final» que empezaría a principios de abril. El gobierno respondió con la detención preventivamente a sus dirigentes y con la declaración de la ley marcial. Cuando un francotirador del gobierno disparó contra la multitud y mató a un joven de 17 años, las protestas estallaron en la ciudad y se empezaron a levantar barricadas. Para entonces, la Coordinadora había conseguido reunir a un impresionante abanico de grupos: distribuidores de agua a pequeña escala, campesinos de los valles y del altiplano, cultivadores de coca, sindicatos, obreros de fábrica, estudiantes, intelectuales progresistas, organizaciones cívicas, asociaciones de barrio –con frecuencia dirigidas por mineros desplazados–, así como campesinos aimara, niños de la calle y parte de las clases medias. El 4 de abril, los huelguistas atravesaron el cordón militar alrededor de la plaza central de la ciudad y entre 50.000 y 100.000 personas participaron en una asamblea al aire libre. Como resultado directo de la presión popular, el 8 de abril se expulsó de Bolivia a Aguas del Tunari y la venta, distribución y consumo de agua volvieron a manos de una empresa colectiva autogestionada (SEMAPA).

La Coordinadora fue incapaz de mantener movilizaciones tan importantes en número. Pero Cochabamba fue un preludio de posteriores acontecimientos en dos aspectos clave. En primer lugar, allí cobraron fuerza los llamamientos por una asamblea constituyente. En segundo lugar, en la medida en que la Coordinadora carecía de estructuras de liderazgo jerárquicas y no estaba infestada de clientelismo y caudillismo, supuso un ensayo general a escala municipal de la representación nacional de octubre de 2003, así como un modelo político inspirador para los activistas antiglobalización metropolitanos.

Abril de 2000 también fue escenario de las movilizaciones de los *cocaleños* y los colonos campesinos contra la amenaza de erradicación en los Yungas y en el altiplano septentrional. La CSUTCB, la confederación sindical campesina, estableció una serie de cortes de carretera. Las comunidades aimara de Omasuyos, situadas en el noroeste de La Paz, desempeñaron un papel principal, destacó en particular el secretario ejecutivo de la

CSUTCB, Felipe Quispe, conocido como *el Mallku*, el cóndor⁷. Las comunidades quechua y aimara en Sucre, Oruro y Potosí siguieron el ejemplo, al igual que los cultivadores de coca del Chapare. El asesinato de dos aimaras en Achacachi el 9 de abril hizo saltar la revuelta popular en la zona y empujó al gobierno a enviar a 1.000 tropas y aviones. Los insurgentes se negaban a pagar por el agua o la tierra o a reducir la producción o el consumo de coca. En septiembre-octubre de 2000, los cortes de carretera organizados por la CSUTCB y sus llamamientos a una marcha sobre la capital despertaron el espectro revolucionario de 1781. La escasez de alimentos empezó a afectar a La Paz. Quispe y sus seguidores comenzaron a exigir una nación aimara compuesta por confederaciones de comunidades. La idea de «dos Bolivias», una indígena y la otra *q'ara*, o no india, circulaba no sólo entre los círculos aimara rápidamente radicalizados, sino por toda la sociedad civil⁸.

Las movilizaciones en Cochabamba, los valles de los Yungas y el altiplano, aunque limitadas regional y sectorialmente, lograron arrancar de una de las figuras políticas más autoritarias de la Bolivia contemporánea concesiones respecto a la erradicación. Al principio, Banzer se demostró incapaz de contener los movimientos sociales insurgentes tanto en el altiplano como en las tierras bajas. Le salvó el fracaso de la alianza estratégica y táctica entre Quispe, Morales y los restos de la Coordinadora. Olivera no fue capaz de proporcionar un buen número de soldados de infantería para los piquetes de septiembre-octubre de 2000 y Quispe y Morales se enzarzaron en una rivalidad caudillista que infestaría los movimientos sociales hasta octubre de 2003. Banzer negoció hábilmente con Quispe, abrió una brecha entre la CSUTCB y los demás movimientos sociales, en la carrera hacia las elecciones de 2002. El resultado fue el «Acuerdo de la Isla del Sol», en el que el gobierno prometía «abordar» las reivindicaciones campesinas, incluida la revocación de las leyes neoliberales y el fin de la erradicación forzosa en los Yungas.

Pero, como ha sucedido con frecuencia durante los últimos cinco años, las movilizaciones de base rebasaron a sus dirigentes. El nacionalismo aimara radical ganó coherencia, aunque se mantuvo aislado geográficamente y sectorialmente. En junio de 2001, el bloqueo de la CSUTCB en el altiplano de La Paz condujo a la formación del Cuartel General de Qalachaqa⁹. En los valles de

⁷ Al igual que otros líderes aimaras de su generación, Quispe empezó en las iniciativas organizativas sindicales del campo y estaba muy involucrado en la política *indianista* a mediados de la década de 1970 y principios de la de 1980, cuando las facciones *kataristas* dentro de la CSUTCB estaban perdiendo terreno a medida que el nacionalismo aimara ganaba fuerza. Cumplió una condena de cinco años por pertenencia al EGTK (Ejército Guerrillero Túpac Katari), activo en el altiplano desde 1986 hasta principios de la década de 1990. Tras su puesta en libertad en 1998, fue elegido secretario ejecutivo de la CSUTCB, la federación sindical campesina nacional que cobró nueva fuerza política bajo su liderazgo.

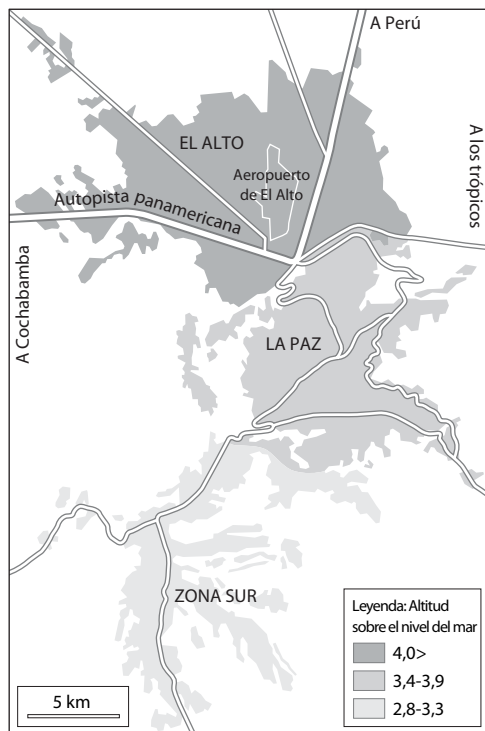
⁸ *Q'ara*: literalmente, desnudo o calvo, alguien que vive como un parásito de la comunidad; utilizado con frecuencia como sinónimo de «blancos» o mestizos.

⁹ Punto de reunión de las milicias de las comunidades aimara, a las afueras de Achacachi, en la carretera hacia La Paz.

los Yungas, los cultivadores de coca de ascendencia aimara se movilizaron con independencia de los partidos o *caudillos* y durante ese mismo mes consiguieron expulsar al «destacamento especial conjunto» estadounidense-boliviano e impedir la erradicación forzosa en su región. Al mismo tiempo, las organizaciones de barrio estaban volviéndose cada vez más activas en El Alto y los campesinos indígenas empezaron a organizarse en el sur.

El perfil progresivamente político de las comunidades indígenas y campesinas quedó claramente revelado en las elecciones al parlamento de 2002. El MAS, dirigido por Evo Morales, obtuvo 27 escaños de 130 en la Cámara de Diputados y el MIP (Movimiento Indígena Pachakuti), dirigido por Felipe Quispe, consiguió 6; el MAS obtuvo además 8 de un total de 27 escaños del Senado. En la contienda presidencial, Morales, con un 20,9 por 100 de los votos, fue derrotado por muy poco por Sánchez de Lozada, con un 22,5 por 100. Ningún partido de izquierdas de Bolivia había logrado nunca por sí solo más de un 5 por 100 de los votos a escala nacional. Estos éxitos despertaron la esperanza de una transición gradual «desde arriba» como vía de salida de la crisis de larga duración. Los resultados de las elecciones eran un signo claro de que los movimientos sociales –cultivadores de coca de las tierras bajas y de las zonas subtropicales, federaciones sindicales del este y el noreste, comunidades quechua y aimara de Sucre y Potosí, comunidades aimara del altiplano occidental y el movimiento cívico antiprivatización de Cochabamba– estaban inclinando la balanza de las fuerzas políticas. Un pequeño pero importante sector de la clase media urbana, ofendido por el dominio de las multinacionales, la corrupción generalizada y la crisis económica, votó también al MAS, que recibió un impulso de última hora cuando el embajador estadounidense Manuel Rocha amenazó con cortar las ayudas en el caso de una victoria de Morales.

Sánchez de Lozada volvió, pues, al poder en 2002, con poco respaldo público y sin un proyecto claro, en una débil coalición de gobierno con el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Tras diecisiete años de ortodoxia financiera, el proyecto neoliberal se percibía de manera cada vez más generalizada como un puro saqueo. La renta *per capita* no había subido desde 1986 y Bolivia tenía la segunda distribución de la renta más desigual de todo el continente, únicamente era peor el caso brasileño. El 20 por 100 mejor situado de la población poseía 30 veces más que el 20 por 100 que se encontraba en peores condiciones y un 60 por 100 de la misma vivía en la pobreza; en las áreas rurales, el porcentaje llegaba al 90 por 100. La tasa de desempleo oficial se había triplicado, llegaba a un 13,9 por 100, mientras que la proporción de personas que trabajaban en el «sector informal» había ascendido del 58 al 68 por 100 en quince años. La mortalidad infantil era de 60 por cada 1.000 nacimientos y la esperanza de vida estaba en los 63 años, frente a las medias continentales de un 28 por cada 1.000 y de 70 años respectivamente. Las infraestructuras seguían en un estado rudimentario en gran parte del país: más del 70 por 100 de las carreteras estaban sin asfaltar y, en las zonas rurales, sólo un 25 por 100 de los hogares contaba con electricidad.



Quizá el lugar donde más se ha concentrado la miseria sea El Alto, cuya población ha crecido más del doble entre 1988 y 2002. Los recién llegados son en su mayor parte migrantes de las provincias mayoritariamente aimaras de La Paz, que han entrado en una economía que gira casi en su totalidad en torno a actividades informales, artesanales, comerciales y de servicios, con algo de actividad manufacturera a pequeña escala. Sin embargo, el empleo asalariado es limitado. Los servicios urbanos básicos son exiguos o inexistentes: el 53 por 100 de los hogares de El Alto carecen de agua corriente y la renta familiar media es de dos dólares al día.

En defensa del gas

El nuevo gobierno de Sánchez de Lozada se dedicó a sostener el proyecto neoliberal hasta el final. Las movilizaciones populares estallaron a principios de 2003 en respuesta a dos medidas decretadas desde Washington. En enero, después de que el enviado estadounidense, Otto Reich, hubiera amenazado con cortar las ayudas si no se reanudaba la erradicación de la coca, 30.000 coccaleros de Chuquisaca marcharon sobre Sucre y se levantaron piquetes en Potosí, el Chapare y los Yungas. En febrero, la aplicación del incremento de impuestos dictado por el FMI lanzó a las multitudes a las calles de La Paz. Los jóvenes aimara apedrearon el palacio presidencial y la Guardia Presidencial disparó contra los policías que

se habían unido a las protestas. Los disturbios pronto se extendieron a El Alto, donde las asociaciones de barrio se movilizaron contra la amenaza de violencia y saqueos por parte del Estado¹⁰. La represión fue rápida y brutal: 29 personas murieron asesinadas y 205 resultaron heridas en el lapso de veinticuatro horas. Se restauró una apariencia de orden cuando, el 18 de febrero, Sánchez de Lozada revocó el incremento de impuestos y destituyó a todo su consejo de ministros. Pero la revuelta había puesto en evidencia el grado de erosión del control gubernamental.

Las maniobras iniciales de lo que se convertiría en la «guerra del gas» tuvieron lugar en septiembre de 2003, en respuesta al proyecto gubernamental de exportar las reservas de gas a través de Chile, el enemigo tradicional de Bolivia, desde la pérdida del litoral del país a manos de su vecino en la Guerra del Pacífico de 1879-1883. El 8 de septiembre, encabezados por sus *jilaqatas* y *mama t'allas* –autoridades masculinas tradicionales y sus consortes femeninas–, 10.000 aimaras de la provincia de Los Andes se unieron a la FEJUVE de El Alto, los estudiantes de la universidad pública de El Alto (UPEA) y los transportistas interprovinciales para marchar desde El Alto hasta la plaza San Francisco, en el centro de La Paz. Desde allí, se dirigieron a la cárcel de plaza San Pedro, para exigir la puesta en libertad de Edwin Huampu, secretario general del sindicato campesino de Cota Cota, en el departamento de La Paz¹¹. Entretanto, cuatrocientos metros más arriba, en oposición a un plan de la alcaldía dirigido a facilitar el aumento de impuestos sobre la construcción de edificios y casas, comenzó la primera de la multitud de huelgas cívicas que paralizarían El Alto. Las reivindicaciones incluían la autonomía universitaria y el rechazo del FTAA [*Free Trade Area of the Americas*, Área de Libre Comercio de las Américas], el proyecto de Bush de creación de una zona panamericana de libre comercio; pero el hilo común que unía a los rebeldes era la negativa a aceptar la exportación de gas a través de Chile, el antiguo enemigo nacional.

El 9-10 de septiembre, una delegación aimara de 1.000 hombres y mujeres, encabezada por Quispe, comenzó una huelga de hambre, junto a los estudiantes de la UPEA y los transportistas, en la Radio San Gabriel de La Paz e hizo un llamamiento para que se iniciaran de inmediato piquetes. Las comunidades aimara de Omasuyos cortaron las carreteras «en defensa del gas», al igual que hicieron la FEJUVE y la Central Obrera Regional (COR) de El Alto¹². Todo el departamento, capital incluida, se quedó inco-

¹⁰ Las asociaciones de barrio, en su mayor parte autoorganizadas, se coordinan en momentos de crisis política a través de la Federación de Juntas Vecinales. La FEJUVE existe a escala nacional, pero la de El Alto se ha aprovechado en parte de las tradiciones políticas de los migrantes de las antiguas regiones mineras y ha desempeñado en los últimos años un papel mucho más militante que la mayoría de las demás.

¹¹ Encarcelado por ser el ejecutor de una pena de muerte (una medida excepcionalmente extrema) dictada por una asamblea comunitaria por robo de ganado.

¹² Como sucede con las FEJUVE, existen COR por todo el país como organizaciones paraguas de los sindicatos urbanos; de nuevo, la COR de El Alto ha desempeñado un papel importante a la hora de coordinar la lucha insurreccional de los últimos años.

municado: muchas carreteras estaban bloqueadas y bajo control de las comunidades. Para el 19 de septiembre, la «Coordinadora de Recuperación y Defensa del Gas», respaldada por el MAS y encabezada por Óscar Olivera y Morales, había movilizado a más de 50.000 personas en La Paz y a 20.000 en Cochabamba para protestar contra la propuesta de exportación de gas a Chile. Al igual que en abril de 2000, Olivera presidió encuentros masivos al aire libre de obreros fabriles, cultivadores de coca del Chapare, estudiantes y agricultores campesinos en la plaza 14 de septiembre de Cochabamba.

Cuando el gobierno envió las tropas del ejército para rescatar a los turistas que se habían quedado atrapados por los cortes de carretera, cerca del lago Titicaca, tres aimaras resultaron asesinados y los representantes locales, reunidos en las proximidades de Warisata, hicieron un llamamiento a las milicias de las comunidades para que dieran una respuesta. La voz se corrió por todo el altiplano, de boca en boca y a través de las emisoras de radio, que emitieron la decisión cuatro veces al día en aimara. La movilización creció y abarcó a Aroma, la provincia más al sur de La Paz donde el 23 de septiembre detuvieron a once rebeldes y a más el día siguiente (aunque pusieron en libertad a Huampu). Quispe rompió las negociaciones con el gobierno. El Movimiento de Trabajadores Sin Tierra hizo un llamamiento a la toma de tierras y los cultivadores de coca del Chapare declararon que cortarían la carretera que va de Santa Cruz a Cochabamba. La COB anunció una huelga general para el 30 de septiembre y su dirigente, Jaime Solares, convocó piquetes y marchas diarios. A la marcha de la COB sobre el centro de La Paz del 29 de septiembre se sumaron carniceros y transportistas en huelga, asociaciones de vendedores de mercado y estudiantes de la UPEA, mientras Olivera y la Coordinadora, por su parte, encabezaban al día siguiente una marcha hacia Warisata de 300 personas.

Para el 1 de octubre, el movimiento había elaborado una serie de demandas comunes: la dimisión de Sánchez de Lozada; un procesamiento nacional del gas y no su exportación a través de Chile; abrogación de la ley de «protección y seguridad ciudadana» –que decretaba penas de cárcel de hasta ocho años por cortes de carreteras– y el rechazo del Área de Libre Comercio de las Américas. A éstas, pronto se añadió el llamamiento por una asamblea constituyente y por juicios contra los responsables de la muerte de manifestantes. El 2 de octubre, en la asamblea de la COB de La Paz, las multitudes exigieron la expulsión de Sánchez de Lozada. En El Alto, la COR y los estudiantes de la UPEA organizaron una marcha para encontrarse con los huelguistas de hambre de las comunidades en la Radio San Gabriel y se enzarzaron en una batalla encarnizada con las fuerzas de seguridad en la avenida 6 de Marzo, que dio lugar a la detención de doce alteños. El 8 de octubre, la COR y el FEJUVE de El Alto convocaron una huelga general contra la exportación de gas. Contaron con el apoyo de los mineros de Huanuni, que habían desempeñado un papel crucial en la Revolución nacional de 1952 y a la hora de fraguar tradicio-

nes de resistencia después de 1960. En 2003, sin embargo, muchos miembros de este contingente hacían valer también sus raíces «indígenas». Cuando la policía disparó contra ellos el 9 de octubre, en Ventilla, a las afueras de El Alto, los mineros se convirtieron en los últimos mártires que caían «en defensa del gas». Desde Warisata a El Alto, el duelo se estaba convirtiendo en una vía para expresar el dolor y la furia colectiva, en un momento en el que los aimaras morían asesinados mientras defendían los bienes nacionales del control extranjero. Sin embargo, al recabar apoyos de otros sectores, la oleada de movilizaciones pasó de ser una lucha india a una batalla «popular», encabezada por aimaras, del campo y la ciudad.

El 10 de octubre, se combinó la táctica aimara de rodear la ciudad desde el campo con batallas callejeras con reminiscencias de anteriores levantamientos y se levantaron barricadas por todo El Alto. Los manifestantes cortaron el suministro de gas de La Paz, al rodear la planta Senkata, de la compañía petrolífera estatal. El gobierno ordenó una operación militar para traer 37 tanques de gas a La Paz al día siguiente; once manifestantes murieron asesinados, mientras los helicópteros daban vueltas sobre la ciudad y los tanques recorrían estrepitosamente las calles. La crisis se intensificó el 12 de octubre –día en que Colón tomó tierra en las Américas–, con el asesinato de veintitrés civiles. Al día siguiente, el número de víctimas aumentó a cincuenta y tres. El 13 de octubre, una muchedumbre de 100.000 personas de El Alto marchó hacia la plaza San Francisco, en medio de La Paz, donde la policía, abrumada y ya sin municiones, levantó la bandera blanca y se retiró, dejando a las masas bajo dirección aimara el control del centro de la ciudad.

Las movilizaciones siguieron extendiéndose. El 14 de octubre, los colonos campesinos convergieron en Santa Cruz, procedentes de Yapacaní, desplazándose hacia el norte y San Julián en el este. La región de tierras bajas de las misiones jesuitas también se cerró. En Potosí, *ayllus* –comunidades quechua y aimara– confederadas clausuraron todas las carreteras del departamento, mientras Sucre se hacía igualmente infranqueable, excepto para las 25.000 personas que marcharon hacia la capital judicial del país y apedrearon el Tribunal Supremo. Todo el eje minero, con centro en Huaniuni, estaba bloqueado. Había una huelga cívica en Oruro, la ciudad más cercana a la región minera, con los mercados cerrados, manifestantes que giraban en torno a la plaza central y estudiantes universitarios que se enfrentaban a las fuerzas de seguridad. En Cochabamba, los agricultores campesinos cortaron la carretera hacia La Paz, mientras estallaban batallas callejeras en el centro de la ciudad. A primera hora de la tarde, 1.300 cultivadores de coca llegaron a La Paz desde los Yungas; representantes de Omasuyos se presentaron en El Alto al caer la noche.

En La Paz, todo estaba cerrado: las principales arterias de los barrios de la ladera estaban cortadas y la rica zona sur estaba rodeada por manifestaciones y por piquetes. El alcalde, Juan del Granado, se unió a la defensora de los Derechos Humanos, Ana María Campero, y a facciones del

MIR y de la NFR [Nueva Fuerza Republicana] para exigir la dimisión de Sánchez de Lozada. Los alteños anunciaron una marcha sobre la capital para el 16 de octubre y aquella noche, al amparo de la oscuridad, miles de hombres, mujeres y niños arrastraron vagones de tren varios kilómetros, hasta el puente donde la autopista de La Paz llega a El Alto y, una vez allí, sacaron los trenes de las vías. Ni siquiera los tanques podían pasar.

Al día siguiente, 2.500 mineros de Huanuni cayeron en una emboscada militar cuando paraban para desayunar en Paracamaya, a 97 kilómetros al sur de La Paz. Dos mineros murieron asesinados y otro resultó gravemente herido. El dirigente del sindicato de la cooperativa minera declaró que el total de 50.000 afiliados se prepararía para marchar sobre La Paz. El Regimiento de Comandos Mantego –en otro tiempo responsable de la caza del Che Guevara– desplegó sus efectivos en la zona sur para mantener a los aimaras de Chaskipampa fuera de la capital. A primera hora de la tarde, se declararon una serie de huelgas de hambre en iglesias de toda la ciudad dirigidas por Ana María Campero y otros intelectuales, que exigían la dimisión de Sánchez de Lozada y la sucesión constitucional del vicepresidente Carlos Mesa. En el distrito 5 de El Alto –cerca de Río Seco, donde habían tenido lugar los enfrentamientos más duros de los días 12 y 13 de octubre–, miembros de asociaciones de barrio atacaron al ejército con dinamita. Se levantaron piquetes campesinos en gran parte del departamento de Oruro, escasamente poblado, y fuerzas populares tomaron el control de las ciudades de Oruro, Sucre, Potosí y Cochabamba, en el sur y el este del país. Las marchas procedentes de San Julián y Yapacaní llegaron a Santa Cruz, donde la policía les impidió la entrada en la ciudad.

Los alteños volvieron a manifestarse el 16 de octubre, llegaron a la plaza San Francisco a través de las tres principales carreteras que entran en la capital. Esta vez había 300.000 manifestantes. Desde el sur llegaron más aimaras, mientras se formaba una cadena humana desde San Miguel, en la zona sur, con el objetivo de llegar hasta las personas que mantenían una huelga de hambre a 20 kilómetros, en Sopocachi. Los huelguistas de hambre se contaban ya por centenares, a los que se sumaron bolivianos expatriados en Suiza, Argentina, Perú y Ecuador. En las tierras bajas orientales, la Asamblea del Pueblo Guaraní, junto con miembros de los pueblos Ayo-reo, Guarayu, Chiquitano, Yucaré y el Mojeño, se pusieron en huelga de hambre en solidaridad con el altiplano, a la vez que Solares y la COB convocaban a su vez una huelga de hambre de «los pobres» en La Paz.

En el palacio, Sánchez de Lozada se mantenía cruzado de brazos, con el sólido respaldo del embajador estadounidense Greenlee, pese a que los funcionarios de las embajadas argentina y brasileña le instaban a dimitir. El vicepresidente Mesa se distanció públicamente del régimen y dejó abierta la posibilidad de una sucesión constitucional. A primerísima hora de la tarde, llegaron noticias de que el ejército había dejado que el resto de los mineros de Huanuni pasara el punto de control de Patacamaya y, hacia el atar-

decer, los *jilaqatas* y *mama t'allas* de Omasuyos –junto con sus comandos armados– llegaron a El Alto. La sensación de que los días de Sánchez de Lozada en Bolivia estaban contados se fue haciendo cada vez más palpable. La insurrección dio lugar a posturas más y más radicales: «O nosotros o él, señor periodista», así lo planteaba un dirigente rebelde alteño. «¡Vamos a por su cabeza, queríamos sacarle del palacio a la fuerza¹³.»

Sin embargo, al final, los insurgentes de octubre no intentaron tomar la Administración del Estado. No había una dirección unida, de hecho, no había dirección en absoluto. Ni Morales ni Quispe fueron capaces de hacerse con el liderazgo en La Paz y El Alto, y mucho menos lograrlo a escala nacional. En septiembre, el ministro de Gobierno Yerko Kukoc afirmó que no podía negociar en Warisata, Sorata o Achacachi porque no había nadie al mando de la insurrección. En los días culminantes de octubre, fuerzas populares heterogéneas se autoorganizaron, deliberaron en asambleas abiertas y actuaron sin esperar las órdenes de un partido político, un sindicato o algún otro dirigente establecido. La ausencia de una autoridad centralizada supuso un obstáculo infranqueable para los esfuerzos del gobierno de contener el levantamiento, incluso con la aplicación, en el contexto boliviano, de altos grados de violencia estatal. Pero los centenares de miles de personas que el 17 de octubre consiguieron escurrirse por las calles del centro de la ciudad hasta tomar la plaza San Francisco, en el corazón de La Paz, se abstuvieron de marchar sobre el Palacio y el Congreso nacional, para entonces los únicos pocos edificios de la capital que seguían bajo control estatal. El resto de la ciudad estaba efectivamente tomada. Apenas un año después de haber llegado al poder por segunda vez, Sánchez de Lozada tuvo que ponerse en manos de sus promotores estadounidenses, que le sacaron del palacio presidencial clandestinamente y le pusieron en un vuelo rumbo a Miami, mientras se anunciaba la sucesión de Mesa. Después de una concentración de victoria el 18 de octubre en la plaza San Francisco, los miembros de la FEJUVE-El Alto y de la COR inundaron las calles principales de El Alto y los puentes que lo cruzan, dando vítores, cantando y pasando comida y cigarrillos a aquellos que subían a sus camiones para el largo viaje de vuelta a los distritos mineros y a las tierras bajas.

Los años de Mesa

Al principio Mesa disfrutaba de altos índices de popularidad en los sondeos de opinión, ayudado por su *status* de político independiente y su falta de promotores de la elite claramente definidos, y, en un primer momento, los movimientos sociales se desmovilizaron para concederle un descanso en el que llevar a cabo su mandato. El apoyo subyacente en el

¹³ Luis A. GÓMEZ, *El Alto de pie. Una insurrección aimara en Bolivia*, La Paz, Comuna, 2004, p. 137.

Congreso al gobierno de Mesa provenía de una alianza tácita con Evo Morales y el MAS, que aprovechó el trato para obtener una suspensión de la erradicación de la coca y para impulsar la organización de cara a las elecciones municipales de finales de 2004. Claramente, el MAS se resintió en las urnas de su matrimonio de conveniencia con Mesa. Pese a la debilidad de sus rivales, no recabó más que el 18 por 100 del voto municipal a escala nacional y sus únicos resultados urbanos importantes los consiguió en Cochabamba, sin lograr conquistarla. El MIP de Quispe se quedó totalmente fuera de juego y las coaliciones *ad hoc* de «grupos ciudadanos» fueron las únicas claras ganadoras. Sin embargo, el MAS no rompería con el gobierno hasta 2005, cuando el rencor popular por la gestión de Mesa del tema de los hidrocarburos había alcanzado niveles críticos.

En julio de 2004, Mesa celebró el referéndum sobre los hidrocarburos prometido en el periodo de la insurrección de octubre. Pero las preguntas estaban formuladas de tal manera que hacían desaparecer la opción de la nacionalización. Por lo tanto, muchas organizaciones clave –COB, CSUTCB, COR-El Alto, FEJUVE y la Coordinadora de Recuperación y Defensa del Gas–, que habían exigido la abrogación de los contratos de gas firmados por Sánchez de Lozada, boicotearon el referéndum. El gobierno de Mesa obtuvo la respuesta que había preparado con cuidado: la ley de hidrocarburos de Sánchez de Lozada se revocaría, pero se llegaría a un equilibrio entre las demandas populares, y los derechos de propiedad y las tasas de beneficio del capital multinacional.

Durante 2005, la polarización política en torno al tema de los hidrocarburos se intensificó drásticamente, de acuerdo con divisorias raciales-étnicas, de clase y regionales. Los estamentos empresariales de Santa Cruz amenazaron con la secesión si se atacaba los intereses del capital privado y nacional. Entretanto, en febrero de 2005, la FEJUVE se movilizó en contra de Aguas de Illimani, la multinacional que gestionaba el agua local y los servicios de alcantarillado, y consiguió revocar el contrato de la compañía para El Alto y La Paz. Llegados a este punto, Mesa abandonó lo que quedaba de su barniz progresista y salió en firme defensa de las multinacionales del petróleo, del gas y del agua, a la par que atacaba a los movimientos sociales y a sus dirigentes. Sin embargo, no envió tanques a las calles, la medida que había atraído a la clase media a las protestas en 2003. El 2 de marzo, la FEJUVE anunció otra huelga contra Aguas de Illimani y tres días más tarde Olivera y Morales rompieron por fin con el gobierno y anunciaron marchas y piquetes en solidaridad con el movimiento alteño por la soberanía nacional sobre los recursos naturales. Mientras los piquetes se extendían a los Yungas, Potosí, Chuquisaca y Oruro y se intensificaban en El Alto y el Chapare, los partidos tradicionales acudieron en defensa de Mesa, que presentó su dimisión el 6 de marzo.

La unión de la derecha en torno a Mesa y la pérdida del apoyo de la clase media para un nuevo proyecto popular-nacional, se vieron contrarrestadas por una tendencia, aunque frágil e incipiente, hacia una mayor unidad programática entre los dirigentes de los movimientos, por regla general dividi-

dos. En un encuentro el 9 de marzo en la sede de la COB en La Paz, la COB, las dos alas de la dividida CSUTCB, una Coordinadora recuperada, el sindicato de los campesinos sin tierra (MST) junto con Morales y Quispe en persona se reunieron por primera vez para establecer un «Pacto por la Unidad». Sólo la FEJUVE, recelosa de partidos y caudillos, se abstuvo de participar en el Pacto. El bloque popular, cuyos contornos se habían dibujado por primera vez en octubre de 2003, volvía a colocarse en el centro del escenario, cerró siete departamentos de un total de nueve y cortó el acceso a la mayoría de ciudades. El 15 de marzo, sin embargo, la aprobación en el Congreso de una nueva ley de hidrocarburos –que aumentaba ligeramente los impuestos sobre el gas, a la par que protegía los contratos de las multinacionales– bastó para que Morales y el MAS volvieran a entrar en el redil parlamentario, parando, pues, en seco los piquetes el 16 de marzo de 2005.

Con las elites de la derecha de las tierras bajas que ganaban influencia sobre el gobierno de Mesa y con las fuerzas de masas del altiplano que propugnaron una ley de hidrocarburos más progresista, las presiones sobre el poder ejecutivo se intensificaron y polarizaron, mientras volvía a estallar la insurrección en mayo y junio de 2005. Este último levantamiento parecía una continuación de la insurrección de octubre de 2003, con la movilización de sectores parecidos y con escenas similares en las calles de la capital; sin embargo, el equilibrio de fuerzas dentro de la coalición insurgente había cambiado.

La rebelión empezó a mediados de mayo, cuando la FEJUVE y la COR declararon una huelga general indefinida en El Alto y la CSUTCB, bajo el liderazgo de Román Loayza, del MAS, movilizó a las comunidades de las provincias para presionar al Senado en relación con la ley de hidrocarburos. En el lapso de dos semanas, las marchas y las huelgas que paralizaban la capital y El Alto se habían extendido a Sucre, Potosí y Cochabamba. El 6 de junio, los cortes de carretera habían cerrado ocho del total de nueve departamentos de Bolivia. Las reivindicaciones de los rebeldes eran diversas y cambiantes: muchos insistían en una asamblea constituyente y en un juicio a Sánchez de Lozada; algunos pedían la dimisión de Mesa, otros, el cierre del Parlamento. La demanda más enérgica, sin embargo, era la de la nacionalización de los hidrocarburos.

El 6 de junio, entre 400.000 y 500.000 manifestantes, en su mayoría de ascendencia aimara, bajaron en tropel desde El Alto hacia el corazón de la capital. Cerca de veinte camiones llenos de campesinos de las comunidades de Aroma llegaron con palos, piedras y hondas. Les acompañaban decenas de miles de paceños que exigían la nacionalización de los hidrocarburos. Los mineros anunciaron su presencia haciendo estallar cargas de dinamita. Se trataba de la mayor oleada de movilizaciones desde octubre de 2003 y mantuvo La Paz bloqueada durante dos semanas consecutivas. Las multitudes desbordaron la plaza San Francisco y, a continuación, se dirigieron hacia la plaza Murillo, jurando que tomarían el Parlamento y ocuparían el Palacio presidencial.

Con su autoridad desmoronándose, Mesa estaba ya preparado para retirarse elegantemente. Pero su propuesta de elecciones anticipadas, aunque respaldada por Morales, se encontró con la resistencia de la derecha. El presidente del Senado Hormando Vaca Díez –una figura destacada del bloque terrateniente con base en Santa Cruz– se negó a renunciar a su derecho constitucional de acceder a la presidencia en caso de que Mesa dimitiera. Su intransigencia fue un factor en la posterior oleada de movilizaciones; la posibilidad de una presidencia de Vaca Díez movió a la acción a personas de distintas clases sociales. Así, pues, las protestas continuaron extendiéndose durante los días siguientes: el 7-8 de junio, los cortes de carretera casi se duplicaron, de 61 a 119, y, en las tierras bajas, los colonos de la frontera y las comunidades guaraníes ocuparon siete yacimientos de gas propiedad de BP-Amoco y de Repsol YPF. También se produjo la toma de tres plantas hidroeléctricas, a la par que en Tapacarí, Cochabamba, los campesinos cerraban las válvulas de los gaseoductos que transportaban 20.000 barriles de gas al día a Chile. Encabezadas por los alcaldes de las capitales, se declararon cerca de cien huelgas de hambre en siete del total de nueve departamentos, con más de 700 personas, en su mayoría de clase media, que exigían la nacionalización y que mostraron el rechazo por Vaca Díez y exigieron la convocatoria de elecciones.

En octubre de 2003, después de que los campesinos de La Paz iniciaran el proceso, la FEJUVE y la COR pasaron a encabezar la insurrección, los mineros desempeñaron un papel secundario. En junio de 2005, la FEJUVE y la COR hicieron el saque inicial, pero fueron los mineros y la CSUTCB quienes llevaron el proceso a su culminación nacional. Cultural y políticamente, sin embargo, los mineros y los campesinos tenían pocas posibilidades de construir puentes con la clase media urbana. De hecho, sin el elemento unificador de la represión estatal –Mesa se abstuvo de enviar tanques, tal como había hecho Sánchez de Lozada–, las relaciones entre los grupos progresistas de clase media y otras fuerzas populares eran más tensas en junio de lo que lo habían sido dos años antes. Hubo una fracción progresista de la clase media que sí que se unió al movimiento, pero sólo de manera tardía, frente a la perspectiva de un gobierno de extrema derecha encabezado por Vaca Díez.

El 9 de junio, se consiguió este limitado objetivo. Vaca Díez había trasladado la sesión del Congreso a la conservadora ciudad de Sucre al huir del asedio en La Paz. El 9 de junio, decenas de miles de mineros y campesinos de las comunidades de los departamentos occidentales de Chuquisaca, Potosí y Oruro se dirigieron rápidamente a la plaza 25 de Mayo de Sucre para evitar que Vaca Díez sucediera a Mesa. Atrapado en Sucre por la huelga de los trabajadores del aeropuerto y ahora bajo protección militar, Vaca Díez acabó rindiéndose, al igual que Cossío, presidente de la Cámara baja, se abrió la posibilidad de que Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente del Tribunal Supremo, prestara juramento como presidente de la nación. Su primera medida fue convocar elecciones generales para diciembre, así que las fuerzas populares-nacionales se desmovilizaron el

12 de junio. Las energías políticas acumuladas se dispersarían ahora, por lo menos de manera temporal. En el ínterin, el proceso electoral formal daría tiempo a la elite política para reorganizarse.

Perspectivas

El ciclo actual ha entrado en un punto muerto temporal. Con la atención política centrada ahora en las elecciones de diciembre de este año, las cuestiones de largo plazo acerca de la reestructuración constitucional del país y el control sobre los recursos nacionales han quedado temporalmente aplazadas. En el momento actual, la confusión rodea el proyecto de una asamblea constituyente: no hay acuerdo sobre cuándo se celebraría, ni acerca de cómo se elegiría a los delegados, mientras los movimientos sociales aún tienen que producir programas formulados explícitamente. Entretanto, los hidrocarburos seguirán siendo el punto crucial de disensión. La nueva Ley de Hidrocarburos aprobada en el Congreso en mayo de 2005 no satisface a nadie, dado que se limita a añadir un impuesto del 32 por 100 a los *royalties* del 18 por 100 que antes debían pagar las empresas de petróleo y gas, pero éste se aplica únicamente a 2 de los 29 yacimientos de gas existentes en Bolivia. De acuerdo con los últimos sondeos, el 75 por 100 de la población está a favor de la nacionalización y es probable que cualquier gobierno entrante tenga que abordar la reivindicación. Para muchos, el gas de Bolivia es la única base de esperanza para un proyecto de desarrollo nacional, iniciado bajo el MNR en la década de 1950, pero abandonado en beneficio del sometimiento al Consenso de Washington en la de 1980.

Con los vientos políticos soplando en nuevas direcciones, ¿cuáles son las perspectivas, objetivos y temores de los diferentes actores de la izquierda? Por un lado, la dirección del MAS y la clase media, temerosos de los riesgos del caos, los intentos de golpe de Estado o el resurgimiento de la derecha, tienen miedo de lo que ven como maximalismo. Por otro, la atracción hacia la perspectiva de la autodeterminación o, incluso, la toma del poder estatal está creciendo en el seno de la COB, la CSUTCB, la FEJUVE y la COR-El Alto. En El Alto, donde las tradiciones indígenas y proletarias de lucha y de memoria histórica chocan, se interpenetran y se alimentan mutuamente, han surgido dos polos en los debates estratégicos desde octubre de 2003. El primero, reflejado sobre todo en las opiniones de los migrantes aimara del campo de La Paz o sus hijos e hijas, insiste en la necesidad de tomar el poder con rapidez y aprovechar los momentos de debilidad o de fragmentación del gobierno. Los grupos radicales de El Alto se sienten frustrados por lo que consideran resultados limitados hasta el momento y por la incapacidad de terminar lo que se empezó durante aquel octubre. Es posible que haya jóvenes, ya veteranos de la recurrente insurrección popular, que opten por formas de lucha armada en el futuro. El segundo polo, que puede verse en la postura de los mineros desplazados, sostiene que para tomar el poder se requiere un programa claro de admi-

nistración de los recursos y de las instituciones del Estado. La generación más joven no recuerda las adversidades de principios de la década de 1980, pero las generaciones mayores acaban de empezar a recuperarse de ellas. La concepción de los sectores aimara más radicales se ve reforzada por sus análisis de 1781, mientras los antiguos mineros están influidos por los recuerdos de 1952 y del hundimiento de la UDP en 1985.

En las áreas rurales con predominio aimara de La Paz, como Omasuyos, las corrientes que promueven el separatismo armado y la confrontación directa con el Estado cuentan con el apoyo tácito, cuando no práctico, de elementos de la CSUTCB. Aunque no hay una agenda clara al respecto, el optimismo sobre las posibilidades futuras de tomar el poder es mayor que en El Alto, donde estas esperanzas están atemperadas, aunque en absoluto ausentes. La CSUTCB estuvo muy dividida entre los seguidores de Felipe Quispe y los de Evo Morales, por más que este año la estrella de Quispe haya perdido brillo. Román Loayza, del MAS, ha consolidado su control sobre la confederación, le ha dado mayor coherencia a escala nacional. La federación Túpaj Katari de La Paz, ahora dirigida por Genaro Flores, hijo del líder campesino que fundó la organización a finales de la década de 1970, mantiene sus aspiraciones combativas. Otras corrientes dentro del movimiento indígena son partidarias de una mayor autonomía municipal y regional, y apuntan de nuevo a los proyectos federalistas indígenas de finales del siglo XIX.

La izquierda tradicional boliviana orientada hacia la COB prácticamente ha desaparecido, desbancada por nuevos movimientos subalternos de indios y *cocaleros*. Es posible ver lo que queda de ella dentro y alrededor del Parlamento, actuando bajo banderas del MAS, aunque dentro del conjunto del MAS la influencia india ha crecido. Morales ha luchado por un programa mínimo, con la mirada puesta en las próximas elecciones generales, pero cuenta con el apoyo de bases indígenas de gran parte del país y el MAS adopta de hecho una voz revolucionaria nacional en el Parlamento.

Si El Alto y La Paz fueron el epicentro de las tres últimas oleadas de insurgencia, la irradiación de la lucha por todo el país resultó, al final, decisiva. Tras haber sido las sedes del poder político y económico colonial y más tarde republicano, los empobrecidos departamentos meridionales de Chuquisaca, Potosí y Oruro dan fe del impacto devastador de la dependencia de la exportación de materias primas para el «desarrollo». El MAS tiene mucha influencia en los sindicatos campesinos de Sucre y Oruro y ha fraguado alianzas con las federaciones de *ayllus* de Potosí, pero la nacionalización se ha convertido en una reivindicación elemental para el movimiento quechua-aimara en su conjunto, con independencia de los lazos que lo unen al MAS. Al igual que en las áreas donde se está poniendo en entredicho el dominio de la derecha (Santa Cruz, Tarija), la iniciativa de base en Sucre, Potosí y Oruro ha ido mucho más allá de lo que imaginaron los dirigentes del MAS. Los guaraníes de las tierras bajas, que no están afiliados a ningún partido político ni a ningún caudillo, tomaron

los principales yacimientos de gas bajo control extranjero en mayo de 2004 y de nuevo en mayo-junio de 2005 y se pronunciaron a favor de la nacionalización, lo cual parecería indicar la posibilidad de conexiones en las tierras bajas dentro de un bloque popular-nacional. Los cocaleros en el Chapare y los Yungas, que han desempeñado papeles cruciales en la insurgencia desde 2000, han visto cómo sus reivindicaciones sectoriales perdían peso en el programa del MAS, a medida que el partido intentaba desarrollar un perfil nacional; por ello se ha suscitado entre las bases una creciente preocupación por el pragmatismo mostrado por la dirección del partido. Es posible que los cocaleros vayan a encontrarse con dificultades a la hora de reafirmar la importancia de la coca como un asunto de soberanía nacional en pie de igualdad con el gas, aunque su propia fuerza como movimiento social seguirá obligando a cualquier gobierno boliviano a abordar la cuestión con cautela.

Cabe imaginar ahora los grandes trazos de un nuevo proyecto popular-nacional, con temáticas y líderes indígenas por primera vez en una posición prominente. Sin embargo, sigue habiendo verdaderas dificultades para transformar las últimas confluencias en un frente político duradero. Todavía existe una desconfianza generalizada –que en ocasiones equivale a un abismo– entre sus distintos componentes potenciales, determinada en parte por diferencias étnicas y de clase. El caudillismo y el personalismo continúan infestando los movimientos indio y cocalero, en tensión con una cultura política de iniciativa de base heredada de la democracia comunitaria y sindical. Los obstáculos en el camino hacia una alianza con los intelectuales y profesionales progresistas de clase media siguen siendo también tremendos. La sensación inicial de esperanza política y de capacidad de llevar a cabo intervenciones significativas, generada entre estos últimos por los acontecimientos de octubre de 2003, se ha reducido; las fracciones que tienen la Asamblea Popular de 1971 y la UDP como referentes históricos se muestran recelosas del radicalismo incontrolado y preocupadas de que la crisis favorezca la reacción de la derecha. Los volcanes gemelos de 2003 / 2005 han cambiado el panorama político de Bolivia; sin embargo, sus resultados siguen siendo muy inciertos.